IASP-AIPS

DP 05/2024, Protección social en Indonesia: oportunidades de reforma durante la pandemia de COVID-19

Dr. Pungky Summadi[1]

Indonesia, por recomendación del Banco Mundial, adoptó una política para cubrir al 40 % más pobre de la población en su programa de protección social. Debido a la limitada capacidad fiscal y al compromiso de Indonesia de lograr la cobertura universal, el umbral solo es aplicable al seguro social de salud *(Jaminan Kesehatan Nasional/JKN),* entre todos los programas de protección social. El Gobierno paga la prima anual del JKN para el 40 % de los indonesios más pobres, y el programa es el que más contribuye al presupuesto de Indonesia para servicios de salud. El Ministerio utiliza el DTKS como parte de la lista de beneficiarios del JKN.

Breve descripción de los programas de protección social de Indonesia

La crisis financiera asiática se produjo en 1997 y obligó al Gobierno a crear redes de seguridad social. Entre los nuevos programas importantes que se introdujeron figuraban la ampliación de la asistencia social para los servicios de salud, las becas para los pobres, especialmente las niñas, el salario mínimo, el desarrollo comunitario, la creación de empleo y los subsidios alimentarios (Ananta y Siregar, 1999; Sumarto et al., 2005; Suryahadi et al., 2001). El éxito de estos programas llevó al Gobierno a internalizarlos en las actividades habituales del sector. Para algunos ministerios, esto supuso un aumento sustancial de su presupuesto anual. Algunos ministerios que no participaron en las redes de seguridad social adoptaron la idea y comenzaron a crear muchos otros programas de asistencia social y desarrollo a pequeña escala con el objetivo de aliviar la pobreza.

---

[1] Agencia Nacional de Planificación del Desarrollo. Este documento reproduce parcialmente un artículo del Dr. Sumadi publicado en la revista *Asean Social Work Journal*, volumen 11, n.º 01, junio de 2023, ISSN: 2089-1075, e-ISSN: 2963-2404, DOI: https://doi.org/10.58671/aswj.v11i1.41. El Dr. Sumadi pertenece a la Agencia de Empoderamiento, Protección Infantil y Control de la Población, Gobierno de la Capital de Yakarta, Indonesia.

En 2006, Indonesia abolió muchos de ellos tras una evaluación exhaustiva. En el ámbito de la asistencia social, por ejemplo, el Ministerio de Asuntos Sociales prestaba servicios a las personas mayores, los niños y los grupos vulnerables. El ministerio clasificó a las personas vulnerables en 23 categorías, empezando por los niños pobres, los niños desatendidos, los ancianos pobres, los ancianos desatendidos, los discapacitados pobres, los discapacitados desatendidos, etc. Gestionaban los programas de asistencia social en función de los tipos de vulnerabilidad, en lugar de la cuestión más importante que debían abordar. Y la mayoría de los programas consistían en transferencias de efectivo. En su evaluación del rendimiento presupuestario del Ministerio, Bappenas[2] descubrió que había un programa de empoderamiento económico exactamente igual gestionado por 23 unidades diferentes. Hubo un caso en el que un programa de transferencias de efectivo cubría a menos de 10 000 beneficiarios, cuando se suponía que debía ayudar a millones de personas mayores en situación de pobreza extrema. En general, había demasiados programas, mal diseñados y con una cobertura demasiado reducida. Las duplicaciones de programas eran habituales, por no hablar de los solapamientos entre beneficiarios. Además de las transferencias de efectivo, muchos programas seguían proporcionando prestaciones en especie sin criterios operativos ni orientaciones claros.

La subida del precio internacional del petróleo en 2004 obligó a Indonesia a replantearse la idoneidad de su política de asistencia social. Indonesia había adoptado desde hacía tiempo una política de subvenciones a los precios de los combustibles, lo que hacía que los ricos fueran los principales beneficiarios de las subvenciones (Dick, 2017; 2 Sumadi, 2010). El Gobierno tuvo que salvar su presupuesto eliminando las subvenciones y compensando a los pobres mediante redes de seguridad social. Se debatió que la asistencia en especie no era práctica si Indonesia quería compensar a millones de personas pobres, por lo que el Gobierno creó una transferencia de efectivo incondicional (*Bantuan Langsung Tunai/BLT)*. El programa supuso la primera iniciativa del país para elaborar de forma sistemática y científica una lista de beneficiarios (Rosfadhila et al., 2013) . A lo largo del camino, y tras un esfuerzo de coordinación largo y doloroso, hasta la fecha, al menos el seguro social de salud, los subsidios alimentarios y energéticos, los fertilizantes, las becas y los programas de transferencia de efectivo incondicional y condicional han utilizado listas de beneficiarios3. En 1998, Indonesia inició un régimen democrático. Los políticos elegidos que ocupan cargos ministeriales hacen todo lo posible por ejercer su poder. Consideran que la lista de beneficiarios es un medio para obtener votos. La nueva era democrática marcó el fenómeno de que muchos ministerios sectoriales legitimaran sus funciones y responsabilidades en forma de ley, añadiendo la responsabilidad específica de crear una base de datos sectorial. Cuando las transferencias de efectivo se hicieron políticamente populares, también crearon listas de beneficiarios. En la actualidad, Indonesia tiene al menos cinco conjuntos diferentes de listas, de nuevo con el objetivo de cubrir a todos los pobres, creadas individualmente por diferentes ministerios. La mayoría de estos ministerios se muestran reacios a compartir sus listas de beneficiarios.

Los programas de seguridad social tienen una historia interesante. El programa de seguro social de salud se inició en 1949 y fue gestionado por una unidad especial dependiente del Ministerio de Salud. Comenzó cubriendo a los funcionarios públicos y a sus familiares. La unidad se transformó en una empresa estatal (PT Askes) en 1992. La cobertura del programa seguía limitándose a los trabajadores del Gobierno y a los profesores de las escuelas públicas, aunque la empresa amplió sus servicios para cubrir a los ciudadanos particulares.

La normativa inicial para los programas de seguridad social en el empleo comenzó en 1947, cuando el Gobierno promulgó la ley sobre accidentes de trabajo. Pero el verdadero servicio de seguridad social comenzó mucho más tarde, en 1956, cuando el Gobierno puso en marcha el programa de salud para los trabajadores, gestionado por su propia fundación de seguridad social *(Yayasan Dana Jaminan Sosial)*. En 1977, la fundación se convirtió en una empresa de seguridad social: Perum Astek. Cuando la empresa pasó a denominarse PT Jamsostek en 1995, ofrecía programas de salud, accidentes laborales, vejez y prestaciones por fallecimiento.

En 1963 nacieron otras dos empresas de seguridad social. PT Taspen, para funcionarios públicos, y PT Asabri, responsable de cubrir al personal militar, policial y civil. PT Taspen comenzó inicialmente con la vejez y la pensión, mientras que PT Asabri ofrecía programas de accidentes laborales, vejez, prestaciones por fallecimiento, crédito para la vivienda y crédito general a corto plazo. El Ministerio de Defensa proporcionaba el servicio de salud mediante reembolso antes de que se transfiriera a BPJS Kesehatan en 2014.

El país aprendió dolorosamente de la crisis financiera asiática de 1997.

En primer lugar, la caída de la rupia indonesia frente al dólar estadounidense elevó el coste de los medicamentos y los equipos médicos, lo que perturbó la capacidad del Gobierno para prestar servicios de salud. La baja cobertura del seguro social de salud se abordó con la creación de un programa de seguro de salud con «carácter de asistencia social». El Gobierno asignó a PT ASKES la cobertura de la población afectada mediante subvenciones a las primas de seguro. Dado que la proporción de titulares de pólizas de seguro estaba financiada por el Gobierno, este conservó, naturalmente, la mayor parte del control sobre la política y la aplicación del programa. Sin embargo, el aumento de la cobertura del seguro médico social fue una de las partes más importantes de los programas de protección social del Gobierno. A principios de 2005, la cobertura del programa era de alrededor de 60 millones de personas, aproximadamente el 26 % de la población de Indonesia (BPJS Kesehatan, 2020).

En segundo lugar, la crisis llevó al país a una nueva era democrática. El populismo se extendió ampliamente y muchos líderes locales asignaron a las oficinas de salud locales —que nunca habían tenido experiencia ni conocimientos en la gestión de programas de seguros— la tarea de gestionar el seguro médico social, y todo ello de forma gratuita. El FMI exigió a Indonesia que vendiera sus empresas estatales como parte del programa de reestructuración económica y fiscal del país. Indonesia fue testigo de cómo sus países vecinos compraban sus empresas estatales más rentables a través de sus fondos soberanos o de pensiones. La gestión de uno de los fondos de pensiones vecinos aprendió de Indonesia cómo crear un programa de pensiones sólido en los años 60; e irónicamente para los indonesios, 30 años después, esa misma institución disponía de fondos suficientes para comprar las empresas estatales de Indonesia.

Aprendiendo de la experiencia anterior, el Gobierno de Indonesia promulgó la Ley de Seguridad Social en 20044. La ley no entró en vigor hasta siete años después, cuando Indonesia promulgó la Ley n.º 24/2011 sobre la transformación de las empresas de seguridad social: PT Askes se convierte en BPJS Kesehatan, y PT Jamsostek se convierte en BPJamsostek. PT Taspen y PT Asabri se fusionarán con BPJamsostek en 2029 debido a las características únicas y especiales de sus operaciones. La ley permite

al Gobierno contratar a profesionales, establecer una gobernanza de alto nivel y crear más autoridades necesarias para las aseguradoras, como la ampliación de las prestaciones, la gestión de activos y la imposición de sanciones por posibles retrasos en el pago de las primas. Fue una transformación total. Ambas empresas tuvieron que cerrar, pero no se liquidaron.

Varias razones explican el retraso. En 2005, el Parlamento de la provincia de Java Oriental impugnó la ley de seguridad social del Gobierno central. Rechazó la idea de que solo el Gobierno central tuviera derecho a ofrecer un programa de seguro médico social. El Tribunal Constitucional aprobó la demanda de Java Oriental. Desde entonces, muchos otros gobiernos locales siguieron su ejemplo y el rendimiento del programa siguió deteriorándose.

En segundo lugar, el aumento del precio internacional del petróleo en 2004 obligó al Gobierno a centrarse en la reducción de la pobreza, y la asistencia social pasó a dominar la agenda de protección social del Gobierno.

En tercer lugar, la Ley de Seguridad Social n.º 24 contiene principios generales para el establecimiento de la seguridad social. Faltaban leyes adicionales para poner en marcha los programas de seguridad social. En 2011, el Gobierno promulgó finalmente la Ley de Entidades de Seguridad Social, que establece las disposiciones necesarias para el funcionamiento de una empresa de seguridad social, entre otras cosas, el estatuto jurídico especial, la gobernanza, las tareas y funciones, los derechos y obligaciones, la financiación, las disposiciones fiduciarias y los derechos para aplicar sanciones, etc.

La Ley 24/2011 concede un período de tres años para la transición jurídica, financiera, administrativa y operativa, y estipula que las nuevas entidades de seguridad social deben comenzar a operar antes del 1 de enero de 2014. Al final del período de transición (1 de diciembre de 2013), PT Askes registraba 121,6 millones de afiliados (BPJS Kesehatan, 2014), mientras que PT Jamsostek tenía 33 millones (PT Jamsostek, 2013). A finales de abril de 2023, el programa de seguro social de salud cubría a algo más de 252 millones de indonesios, es decir, aproximadamente el 90 % de la población (BPJS Kesehatan, 2023), mientras que el programa de seguridad social laboral atendía a 64,6 millones de trabajadores (alrededor del 44 % de los 147 millones de trabajadores privados y públicos de Indonesia) (Kementerian Tenaga Kerja, 2023; PT Asabri, 2023; PT Taspen, 2023).

Durante los últimos 18 años de trabajo de reorganización, los programas de protección social de Indonesia cubren a la población según el enfoque del ciclo de vida (Habibullah, 2017; Kusumastuti et al., 2018; OCDE, 2019):

Para toda la población indonesia: Fondo de la Aldea, Seguro Social de Salud, Seguro Social de Empleo, Asistencia Social y Rehabilitación para Personas con Discapacidad.

De 0 a 5 años: transferencia monetaria condicionada *(Program Keluarga Harapan)**.

De 6 a 21 años: becas *(Kartu Indonesia Pintar* y *Bidikmisi)*, subsidio por hijos *(Program Kesejahteraan Sosial Anak),* transferencia monetaria condicionada, programas de formación de trabajadores 4

(Tarjeta de Preempleo y programas similares gestionados por el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Industria).

21-59 años: subsidio alimentario*, subsidio energético* (electricidad y gas para cocinar), transferencia monetaria condicionada, formación para pymes, créditos subvencionados *(Kredit Usaha Rakyat)*, programa de empoderamiento económico *(Pahlawan Ekonomi, Program Kewirausahaan Sosial, Program Kewirausahaan Nasional)*, programas de formación para trabajadores, seguridad social laboral, viviendas subvencionadas*.

60 años y más: servicios y subsidios para personas mayores, pensiones.

Reforma durante la pandemia de COVID-19

En una reunión, cuando el ministro de Planificación del Desarrollo preguntó a sus adjuntos cómo podía Bappenas ayudar a las personas que no podían ir a trabajar si Indonesia tenía que confinar el país debido a la propagación de la COVID-19, respondí: «Dado que contamos con todas las modalidades para proporcionar asistencia social a los necesitados, desde alimentos, energía, educación y salud, entre otras muchas cosas, recomiendo que utilicemos los programas existentes». Algunos de nosotros aportamos más explicaciones, pruebas y otros datos que respaldaban el debate y seguimos sugiriendo que se utilizaran los programas existentes. Cuando el ministro no respondió, supe que se avecinaría una avalancha de programas de asistencia social y protestas masivas. En cuestión de semanas, el Gobierno respondió rápidamente a la COVID-19 emitiendo una normativa gubernamental para aumentar el déficit presupuestario hasta el 6 % del PIB durante los tres próximos ejercicios fiscales a partir de 2020. El Gobierno preparó los programas de mitigación necesarios antes de declarar un confinamiento limitado en enero de 2021. Se pidió a los gobiernos locales que participaran activamente en el control y la aplicación de los niveles de confinamiento a nivel local (Pemerintah Republik Indonesia, 2020). Todas las actividades se detuvieron. Para compensar a los afectados y necesitados, al principio el Gobierno puso en marcha siete programas de transferencia de efectivo, además de los programas de asistencia social ya existentes mencionados anteriormente (Habibullah et al., 2022; Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2020a, 2020b; Lutfi, 2021; Susantyo et al., 2023):

1. Subsidio alimentario *(Bantuan Sembako)* para 4,2 millones de personas pobres en Yakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan y Bekasi (Jabodetabek)

Un estudio realizado por Habibullah, Jayaputra y Muhtar (2022) muestra que la implementación del programa de subsidios alimentarios (Sembako) funciona bien. Sin embargo, los beneficiarios se quejan de que los tipos, las cantidades y los productos recibidos difieren de lo establecido en las disposiciones. Según mi estudio, en las primeras conversaciones sobre el mecanismo de distribución de Sembako entre Bappenas, TNP2K, el Ministerio de Empresas Públicas (como accionista de los bancos estatales), el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Asuntos Sociales, todos coincidieron en que el objetivo final de utilizar el sistema bancario como mecanismo de entrega del programa es reducir los costes de transacción, ya que los bancos ofrecen un servicio gratuito para este programa, en comparación con el servicio de Correos, que cobra una tarifa determinada. Todos sabían y esperaban que, más adelante, los servicios bancarios pudieran proporcionar servicios financieros básicos y comerciales adicionales

que contribuyeran a aumentar la educación financiera y la inclusión financiera de los 6 millones de beneficiarios de Sembako (antes de que se convirtieran en 10 millones de beneficiarios unos años más tarde), pero el aumento de la inclusión financiera no era el objetivo principal. El cambio de ministro de Asuntos Sociales a finales de 2020 también modificó la política operativa de Sembako. En la actualidad, esto hace que la oportunidad de aumentar la inclusión financiera sea más difícil.

2. Transferencia de efectivo *(Bantuan Sosial Tunai)* a 9 millones de personas fuera de Jabodetabek;

3. Transferencia de efectivo del Fondo de la Aldea *(BLT Dana Desa)* a 7,6 millones de personas pobres en todas las aldeas;

4. Subsidio de electricidad a 33,6 millones de beneficiarios;

5. Tarjeta de preempleo *(Kartu PraKerja)* a 5,6 millones de personas;

6. Subsidio salarial *(Subsidi Upah)* a 13,9 millones de trabajadores afectados; y 5

7. Subsidio de capital circulante *(Banpres Produktif)* a 12 millones de pymes.

Los gobiernos provinciales y locales también pusieron en marcha sus propios programas de mitigación de la COVID-19. La mayoría de ellos consistían en transferencias de efectivo. En los primeros meses de aplicación de los programas, el Gabinete se dio cuenta de que se estaban llevando a cabo demasiados programas en el país. Las protestas de los gobiernos locales y la sociedad civil se centraron principalmente en la falta de precisión en la selección de los beneficiarios. A petición del presidente, Bappenas propuso un programa de reforma de la protección social. Los cinco elementos principales del programa son:

1. Registro socioeconómico y monografía digitalizada de las aldeas.

2. Transformación digital del pago de la asistencia social.

3. Simplificación de los programas de asistencia social.

4. Protección social adaptativa.

5. Ampliación del programa de seguridad social.

El menú completo del ciclo de vida de los programas de protección social permite al Gobierno de Indonesia reducir el sufrimiento de la población debido a la política de confinamiento. El Gobierno estaba decidido a garantizar que las personas pobres, vulnerables y afectadas pudieran mantener su bienestar. Las instituciones locales e internacionales predijeron que la tasa de pobreza de Indonesia se dispararía. Por ejemplo, SMERU predijo que la tasa de pobreza de Indonesia pasaría del 9,2 % en 2019 al 12,4 % en 2020 (SMERU, 2020). El Centro de Estudios Políticos de Indonesia (CIPS) estimó que, a finales de 2020, la tasa podría alcanzar entre el 9,7 % y el 12,4 % (Katadata, 2020). CORE Indonesia, en su comunicado, estimó que el número de personas pobres del país aumentará entre 5,1 y 12,3 millones en el segundo trimestre de

2020 (Katadata, 2020) . El Banco Mundial predijo que Indonesia registrará un aumento de entre el 2,1 % y el 3,6 % en su tasa de pobreza de 2020, lo que supone entre 5,6 y 9,6 millones de personas pobres más (Kontan, 2020). En su documento de trabajo interno sobre el plan de desarrollo del Gobierno para 2021, Bappenas prevé que la tasa de pobreza de Indonesia en 2020 no superará el 10,34 % (Bappenas, 2020). En su comunicado de prensa de septiembre de 2020, la BPS anunció que la tasa de pobreza de Indonesia era del 10,19 %, lo que supone un aumento del 0,97 % con respecto a la de septiembre de 2019 (o 2,76 millones de personas pobres más).

Hay al menos tres razones principales por las que la tasa de pobreza real de 2020 es mucho más baja que las predicciones anteriores: En primer lugar, los programas de protección social existentes y adicionales cubren un gran porcentaje de la población indonesia, independientemente de la baja fiabilidad de las listas de beneficiarios. En segundo lugar, la ampliación de la capacidad fiscal del Gobierno central más allá del límite legal en tiempos normales (3 % del PIB), junto con varias reasignaciones presupuestarias —incluso de los proyectos de desarrollo más estratégicos y los gastos administrativos— proporcionan un margen muy sustancial de financiación para la red de seguridad de los grupos destinatarios mencionados. En tercer lugar, el Gobierno central decidió flexibilizar el uso de las transferencias fiscales a los gobiernos locales (con fines administrativos y de desarrollo en situaciones normales) y utilizarlas como instrumentos de mitigación durante la pandemia. Tras comprender la dinámica de la implementación de todos los programas de protección social y los sistemas de selección de beneficiarios eficaces utilizados por diferentes instituciones, incluidos los informes de evaluación rápida disponibles de dichos programas, Bappenas cree que Indonesia necesita contar con un sistema integrado de gestión de datos de beneficiarios.

Registro socioeconómico y monografía digitalizada de las aldeas

La idea surgió entre los planificadores de Bappenas durante los inicios de la pandemia de COVID-19. Hay al menos nueve razones para que Indonesia elabore un registro socioeconómico. En primer lugar, los supervivientes de los graves desastres naturales que se produjeron en algunas provincias necesitaban servicios de psicoterapia o de superación del trauma. Pertenecían a todos los niveles de ingresos. El Ministerio de Asuntos Sociales es responsable de dicho servicio. Sin embargo, los trabajadores sociales y los proveedores de servicios no podían llegar a quienes no figuraban en la lista de beneficiarios del DTKS, ya que esta solo cubre al 40 % más pobre.

En segundo lugar, cinco listas de beneficiarios para canalizar los programas de asistencia social son demasiadas y solo crean problemas y confusiones. La mayoría de ellas se elaboraron utilizando criterios específicos de las instituciones que las elaboraron. Al menos siete gobiernos provinciales protestaron ante Bappenas por tener que utilizar la lista de planificación familiar, por ejemplo, cuando la mayoría de los indicadores son específicos de la población (por ejemplo, el uso de anticonceptivos, la incidencia de la mortalidad infantil, etc.), aunque existen indicadores socioeconómicos básicos. Tras mantener conversaciones con los responsables de elaborar las listas, estos reconocieron que no había comunicación ni consulta sobre la armonización de la información cuando recopilan datos. Incluso cada ministerio tiene una comprensión, capacidad y métodos diferentes para recopilar datos, lo que los hace incomparables entre sí. En 2022, la Secretaría de los ODS de Bappenas descubrió que los datos a nivel

nacional sobre los ODS de las aldeas eran totalmente inútiles. El conjunto de datos, valorado en 3 billones de rupias, era científica y estadísticamente inaceptable.

En tercer lugar, cuando hay que actualizar la lista de beneficiarios, la mayoría de los ministerios se limitan a dar instrucciones a los gobiernos locales para que mejoren esos datos, sin proporcionar información técnica suficiente ni supervisar qué hay que actualizar, cómo hacerlo, cómo verificar los nuevos datos, etc.

En cuarto lugar, cuando el gobierno local envía los datos actualizados a los ministerios sectoriales utilizando una aplicación específica, el sistema absorbe todos los datos, dejando a los gobiernos locales sin copia. Los ministerios sectoriales tienen que aprobar los datos nuevos y actualizados y devolverlos a los respectivos gobiernos locales.

En muchos casos, el Gobierno central devolvió los datos antiguos.

En quinto lugar, es una práctica habitual que los responsables de elaborar las listas de beneficiarios no quieran compartir sus datos con otros, lo que obliga a otras instituciones a creer que tienen que elaborar sus propios datos. Hay dos posibles razones para este fenómeno: a) el responsable de los datos no quiere que otras instituciones descubran que la calidad de sus datos es deficiente; y b) el responsable de los datos no quiere que otros usuarios utilicen sus datos con fines políticos6.

Ha habido muchos casos en los que la lista de beneficiarios se ha utilizado para obtener votos. Los políticos han utilizado los programas de protección social con fines políticos. Este no es un caso exclusivo de Indonesia.

El presidente Jokowi es plenamente consciente de que la inexactitud de los datos genera una enorme ineficiencia e ineficacia. En 2019 puso en marcha la política «One Data» para crear una buena gobernanza de los datos, producir datos de alta calidad, facilitar el acceso a ellos y promover su uso compartido de forma segura.

En sexto lugar, Bappenas identificó que, desde hace tres años, Indonesia gasta al menos 12 billones de rupias al año en la producción de datos. La mayor parte de los datos se utilizan para programas de protección social. Irónicamente, los ministerios que producen los datos no asignan un presupuesto suficiente para su mantenimiento. Bappenas tardó más de un año en convencer al Ministerio de Finanzas y al comité directivo de One Data de que Indonesia debe crear seriamente un protocolo estricto para la producción y gestión de datos para las políticas públicas.

En séptimo lugar, para los gobiernos locales, la actualización de datos no tiene relevancia política. Prefieren destinar su presupuesto a algo políticamente tangible y atractivo, como programas de asistencia social, infraestructura, educación, salud y agricultura. El registro socioeconómico es básicamente un censo de población con información adicional sobre la situación socioeconómica de cada individuo. Este conjunto de datos proporcionará información valiosa para ayudar a los responsables políticos a diseñar y ejecutar programas de desarrollo. Con mejores datos, los programas altamente prioritarios e importantes deberían diseñarse y ejecutarse de manera más eficaz. Además, la evaluación interna de Bappenas concluye que, con mejores datos, Indonesia podría ahorrar decenas de billones de rupias en programas

altamente prioritarios de protección social, salud, educación, reforma agraria, agricultura, trabajo, infraestructura comunitaria y transporte público.

En octavo lugar, Bappenas propuso al presidente Jokowi cambiar el umbral del 40 % inferior para el programa de protección social y utilizar un umbral científico de vulnerabilidad a la pobreza. El umbral del 40 % inferior ha creado un grave problema político. En 2019, Indonesia pasó del grupo de ingresos medios bajos al de ingresos medios altos. La incidencia de la pobreza se redujo del 9,8 % (2018) al 9,4 %. Naturalmente, la población de Indonesia aumenta, ya que todavía tiene un crecimiento demográfico de poco más del 1 % y su bienestar parece mejorar. Sin embargo, la mejora de las perspectivas de pobreza de Indonesia contradice la asignación cada vez mayor del presupuesto de asistencia social debido a la política del 40 % inferior. Cuanto menor es el número de pobres, mayor es el presupuesto de asistencia social. En cambio, Bappenas propuso utilizar una nueva vulnerabilidad a la pobreza como umbral, que es mucho menor que el 40 % inferior. El presidente rechazó la propuesta de Bappenas hasta saber con exactitud a quién compensar si se les excluye. Nadie pudo proporcionarle esa información. Ni siquiera la lista de beneficiarios más utilizada, DTKS, debido a su bajo nivel de precisión.

En noveno lugar, tras comprender que Indonesia está avanzando hacia una política más orientada al estado del bienestar social, el Ministerio de Finanzas siente la necesidad de disponer de información fiable sobre cómo transferir los fondos públicos de forma eficaz y eficiente a los necesitados. La ampliación de la política actual, que transfiere la asistencia social no solo a través de los bancos estatales y el servicio postal, sino también de instituciones financieras más amplias, creará unos costes de transacción más eficientes y mejorará la educación financiera y la inclusión.

Otra fuente importante de información para un programa de desarrollo eficaz es el sistema de monografías de las aldeas. Este sistema proporciona información sobre los datos administrativos de las aldeas. El programa de monografías digitalizadas de las aldeas tiene por objeto proporcionar información sobre las aldeas con datos adicionales, por ejemplo, el uso del suelo, la situación del suelo, la cantidad y la calidad de las infraestructuras, los riesgos potenciales de desastres naturales, etc. Dados los avances actuales en tecnología digital, la administración de las aldeas necesita digitalizar esta información. Para ello, cada aldea debe contar con al menos una persona que domine el procesamiento de datos. Bappenas cree que la combinación del registro socioeconómico y la monografía digitalizada de las aldeas ayudará a todas las instituciones gubernamentales, desde el nivel central hasta el nivel de las aldeas, a alcanzar mejores objetivos de desarrollo.

Transformación digital del pago de la asistencia social

Indonesia introdujo el sistema de pago digital en los programas de protección social en 2015. Desde entonces, los beneficiarios de los programas disponen de diferentes métodos de pago. En la actualidad, la gestión de los programas de transferencias monetarias condicionadas, subsidios alimentarios y becas utiliza cuentas de ahorro (desembolsadas a través de cajeros automáticos), agentes bancarios, vales electrónicos (integrados en una tarjeta de dinero electrónico) y servicios postales, incluido el sistema digital de cuentas corrientes postales.

El Gobierno asignó a cuatro bancos estatales para que participaran en el programa. Recientemente han surgido casos en los que la distribución desigual de los servicios de estos bancos sigue siendo un problema, especialmente en zonas remotas donde no se dispone de infraestructura informática. El problema se ve agravado por el hecho de que el país sigue teniendo problemas de interoperabilidad entre las instituciones financieras. En muchos casos, los bancos participantes solo disponen de uno o dos cajeros automáticos que dan servicio a un subdistrito con un tamaño geográfico comparable al de Singapur. Esta situación genera altos costes de transporte para los beneficiarios que desean retirar las prestaciones del programa. Sin embargo, en este subdistrito en particular, hay muchas instituciones financieras y servicios locales que técnicamente podrían actuar como intermediarios financieros, pero que no pueden participar en el programa. La agenda de transformación digital de la reforma de la protección social de Indonesia está trabajando en dos iniciativas:

1. Crear una unidad central de mapeo dentro del Ministerio de Finanzas para identificar qué servicios de pago están disponibles en cada pueblo, de modo que, en el futuro, los beneficiarios puedan elegir qué institución financiera y cómo desean recibir las prestaciones. Hasta la fecha, se dispone de banca móvil, banca por Internet y servicios de transacción QRIS, excepto en zonas remotas.

2. Introducir la tecnología de reconocimiento facial. Bappenas ha llevado a cabo con éxito un proyecto piloto para distribuir prestaciones de asistencia social a 2000 familias con esta tecnología avanzada. Los reguladores financieros siguen trabajando en cuestiones de seguridad y otros aspectos técnicos.

Simplificar los programas de asistencia social

Los responsables políticos reconocen que, sin una lista de beneficiarios fiable, es difícil reorganizar los programas. Por ejemplo, la transferencia monetaria condicionada (TMC) tiene un componente educativo, mientras que las becas proporcionan ayuda a todos los estudiantes que cumplen los requisitos. Las superposiciones de beneficiarios de los programas son inevitables cuando los niños de una misma familia reciben ambos programas. La lista de CCT proporciona información sobre el número de niños escolarizados en cada familia. Lo mismo ocurre con la lista de becas. La fusión de estos programas no será difícil si los organismos ejecutores están dispuestos a coordinarse y a utilizar la misma base de datos como base para la integración. El problema radica en que estos dos programas son ejecutados por diferentes ministerios, y cada ministerio tiene sus propios indicadores de rendimiento que debe mantener.

Lo mismo ocurre con los subsidios alimentarios, las ayudas por hijos, los subsidios energéticos y muchos otros tipos de programas de transferencias monetarias. Todos estos programas pueden fusionarse en uno solo y ser gestionados por una sola institución, mientras que los responsables de los programas (los ministerios sectoriales) siguen siendo responsables de la elaboración de las políticas de asistencia social respectivas. Una tarjeta de dinero electrónico tiene diferentes carteras para acomodar las prestaciones de los diferentes programas.

Además, a los gobiernos locales les gusta copiar los programas exitosos «propiedad del gobierno central». Los datos poco fiables, las dificultades para acceder a las listas de beneficiarios de los organismos centrales y los motivos políticos suelen ser las razones

más comunes por las que los gobiernos locales ejecutan sus propios programas de transferencias de efectivo, aunque la naturaleza de los programas locales sea similar a la de los del gobierno central. Si los gobiernos locales desean añadir su programa, solo tienen que añadir otra cartera a la tarjeta. La simplificación de los programas de asistencia social ahorra costes administrativos y de transacción innecesarios tanto al gobierno como a los beneficiarios.

Protección social adaptativa

Los desastres naturales son cada vez más frecuentes, especialmente los relacionados con el cambio climático y la hidrometeorología, como las inundaciones, los incendios forestales y los deslizamientos de tierra. Durante el proceso de rehabilitación y reconstrucción tras el tsunami de 2005-2009

2006, durante el proceso de rehabilitación y reconstrucción tras el tsunami de Aceh, Indonesia proporcionó ayuda en efectivo para que los supervivientes pudieran continuar con su vida. Se pusieron en marcha programas de vivienda porque el Gobierno decidió que los proyectos de infraestructura urbana en curso —el Proyecto de Pobreza Urbana y el Proyecto de Desarrollo de Kecamatan— cambiaran su área de operación, modalidad y beneficiarios objetivo de las provincias de Java Occidental y Central a Aceh y Nias (Sumatra Septentrional). Más recientemente, cuando un gran terremoto y un tsunami arrasaron la zona costera de la ciudad de Palu (7,7 MM) y el norte de Lombok (7 MM, afortunadamente sin tsunami) en 2018, se modificaron las transferencias monetarias condicionadas y los subsidios alimentarios para prestar asistencia a los supervivientes.

El Gobierno de Indonesia también está utilizando un enfoque similar durante la pandemia de COVID-19. Se aumentó la cuantía de las prestaciones de los programas de transferencias monetarias condicionadas y subsidios alimentarios y se distribuyeron con mayor frecuencia. En el marco del programa de subsidios energéticos, el Gobierno proporcionó electricidad gratuita a los hogares con una conexión de 450 VA, mientras que los que tenían 900 VA disfrutaron de un descuento del 50 %. Los requisitos para el programa de tarjetas de preempleo también se flexibilizaron hasta hace poco, cuando la incidencia adicional de COVID-19 en Indonesia se situó por debajo de los 2000 casos diarios. Los beneficiarios del programa siguen estando obligados a realizar cursos de formación para mejorar sus competencias, y la mayoría de ellos se han transformado en cursos en línea. Del mismo modo, en lo que respecta a los programas de seguridad social, durante un determinado período, las entidades gestoras de la seguridad social permitieron a las empresas y a los afiliados aplazar el pago de las primas. En otros momentos, ofrecieron descuentos en las primas.

Los casos de desastres naturales mencionados anteriormente requieren una respuesta rápida. La creación de programas especiales para ayudar de inmediato a los supervivientes lleva mucho tiempo. La adaptación de los programas en curso es un medio eficaz para atender a las personas afectadas. Los daños en las infraestructuras suelen ser enormes y su reconstrucción y rehabilitación requieren varios años. Indonesia está buscando soluciones para movilizar fondos de reserva y del mercado financiero internacional para financiar el programa de rehabilitación tras los desastres naturales. Además, los seguros contra catástrofes también son una opción.

Actualmente, el Gobierno está trabajando en estrategias para preparar a las instituciones pertinentes —y a la población— para hacer frente a este problema. Aún no se han definido claramente las acciones coordinadas de las partes interesadas a diferentes niveles de los gobiernos y los actores privados. Una institución coordinadora dotada de personal técnico competente y liderazgo es un requisito previo para garantizar el éxito de la aplicación de la protección social adaptativa.

La gestión de los datos sobre riesgos es otra cuestión importante. Bappenas colaboró estrechamente con la Junta Nacional de Gestión de Desastres *(Badan Nasional Penanggulangan Bencana / BNPB)* para compartir información y sensibilizar a las localidades sobre los riesgos potenciales en 198 aldeas piloto para el registro socioeconómico y la monografía digitalizada de las aldeas. Bappenas formó a los gestores de datos locales y a los líderes de las aldeas sobre cómo utilizar los datos sobre riesgos de desastres y elaborar, por ejemplo, una política de uso del suelo mejor y más aceptada. La iniciativa de protección social adaptativa permite a los aldeanos darse cuenta y comprender cómo protegerse a sí mismos y al medio ambiente.

Ampliación del programa de seguridad social

Cuando BPJS Kesehatan comenzó a funcionar el 1 de enero de 2014, se convirtió en uno de los programas de seguridad social más grandes del mundo (BPJS Kesehatan, 2022).

Nueve años después de su creación, la empresa sigue teniendo problemas operativos: déficit financiero, reclamaciones duplicadas, ineficiencias en la contratación pública, pagos irregulares de las primas de los afiliados y dificultades para llegar a las personas que viven en zonas remotas. El programa de reformas de este programa incluye la mejora de los servicios8, la gestión operativa y las estrategias de financiación. La empresa también ha suprimido diferentes categorías de servicios para ofrecer un único servicio de alta calidad, lo que ha permitido aumentar la eficiencia en la contratación pública de bienes y servicios.

8 Por ejemplo, ahora el programa cubre la catarata, la cesárea, la fisioterapia y el tratamiento del cáncer.

9 La Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) ha estado ayudando a Indonesia a introducir BPJamsostek con el proyecto PERISAI para aumentar la cobertura de los afiliados. Japón ha implementado con gran éxito Saroushi, el abogado laboral y de seguridad social. Saroushi funciona como agente de seguros y abogado de las pymes japonesas. También ofrece servicios de consultoría para cualquier cuestión laboral, incluidas las relaciones industriales. A través del proyecto PERISAI, BPJamsostek aprenderá y adaptará el servicio en consecuencia, con la convicción de que no solo ampliará la cobertura de la afiliación, sino que también creará un nuevo tipo de empleo y cientos de miles de oportunidades laborales.

La agenda de reformas de BPJamsostek es mucho más ambiciosa. La reforma más importante para la empresa es la introducción de la prestación por desempleo. El programa PreEmployment Card es tan popular que se considera el programa más exitoso en la promoción del reciclaje y la mejora de las competencias profesionales a través de la colaboración con instituciones de formación, mercados electrónicos,

empresas de tecnología financiera y proveedores de portales de empleo (Antara, 2022). Este programa era similar a la naturaleza de la prestación por desempleo que está introduciendo BPJamsostek. Se ha producido un serio debate entre los responsables políticos indonesios sobre cómo se pueden fusionar ambos programas de forma fluida.

Las prestaciones del programa para los miembros de BPJamsostek también se han ampliado para incluir becas y créditos para la vivienda. Mientras tanto, también existe una línea de crédito para la vivienda destinada a los funcionarios públicos, proporcionada por un organismo especial dependiente del Ministerio de Obras Públicas. Se están realizando esfuerzos para fusionar estos dos programas. En consecuencia, BPJamsostek, los reguladores financieros y los responsables políticos tienen que reevaluar la adecuación de las tasas de prima existentes para cada programa en el marco de la política de seguridad social en el empleo.

Ante las dificultades para alcanzar los objetivos de cobertura universal, ambas entidades acuerdan colaborar en otras dos agendas de reforma: la integración de los datos de afiliación y la mejora de la gestión de las agencias. Cuando el registro socioeconómico esté disponible en el segundo semestre de este año, ambas entidades dispondrán de mejor información para mejorar la cobertura de los programas. El análisis estratégico de los datos de afiliación mejorados contará con el apoyo de una nueva gestión de los agentes de seguros. Los responsables políticos y ambas empresas están considerando la posibilidad de integrar las agencias de seguros sociales de ambas empresas en una sola. Los agentes de seguros recibirán formación para prestar servicios relacionados con la salud social y el empleo, incluidas las relaciones laborales9.

Proyecto «Pobreza extrema cero»: puesta en marcha de la agenda de reformas

El concepto principal del proyecto «Pobreza extrema cero» es una intervención multisectorial con un enfoque territorial. Los programas de protección social deben ayudar a las personas a reducir la carga económica y, al mismo tiempo, aumentar las oportunidades de empleo. El Gobierno está decidido a proporcionar a las personas pobres y vulnerables formación práctica y productiva.

La lista de programas de protección social mencionada anteriormente indica qué ministerios e instituciones son los organismos ejecutores a nivel del Gobierno central. La distribución desigual de la cobertura de los programas, la falta de listas de beneficiarios fiables y la mínima participación de los gobiernos locales son fenómenos comunes en la experiencia de protección social de Indonesia. Bappenas cree que el

Gobierno tiene que probar un nuevo enfoque. La política de descentralización de Indonesia, que sitúa al gobierno local como la institución más cercana al pueblo, debe ponerse en práctica de forma más eficaz. El gobierno local debe coordinar la ejecución del proyecto de pobreza extrema cero. Algunos gobiernos locales que han participado en el programa de formación de Bappenas para el análisis de la pobreza —Formación integrada sobre planificación, presupuestación, seguimiento y evaluación de la pobreza (SEPAKAT) (Wahyunengseh y Hastjarjo, 2022)— consideraron que la formación les ayudaba a comprender mejor las cuestiones relacionadas con la pobreza y, por lo tanto, les proporcionaba un mejor conocimiento de la naturaleza y el proceso operativo del proyecto de pobreza extrema cero.

10 La Dirección de Reducción de la Pobreza y Empoderamiento Comunitario de Bappenas colaboró con socios internacionales como el DFAT de Australia (Proyecto KOMPAK), el Banco Mundial y UNICEF en la elaboración de los conceptos de intermediarios de mercado, formación en análisis de la pobreza y registro socioeconómico. El personal de la dirección es el encargado de impartir la formación al gobierno local y al gestor de datos de la aldea durante la ejecución del proyecto piloto. Bappenas garantizó la transferencia de conocimientos, habilidades y experiencia en la ejecución del proyecto piloto al Ministerio del Interior (para las aldeas de las zonas urbanas) y al Ministerio de Aldeas, Desarrollo de las Zonas Desfavorecidas y Transmigración (para las aldeas de las zonas rurales) antes de que estos se hicieran cargo y ejecutaran el proyecto de pobreza extrema en el resto de las aldeas de Indonesia.

11 Bappenas colabora estrechamente con la Oficina Central de Estadística para diseñar el cuestionario del registro socioeconómico, y con el Ministerio del Interior para la monografía digitalizada de las aldeas.

12 En 2010, la Dirección General de Población y Registro Civil del Ministerio del Interior comenzó a proporcionar un número de identidad único a cada ciudadano. Los datos se conocen como datos del registro civil o «Datos Dukcapil». Todos los ciudadanos están obligados a registrar y comunicar todas las actividades demográficas, como nacimientos, defunciones, cambios de residencia, matrimonios y divorcios. La comunicación activa de estos datos sigue siendo escasa, lo que da lugar a un alto grado de incompletitud y error en los datos. La Oficina Central de Estadística utilizó los datos Dukcapil como referencia demográfica en el censo de población de 2020. Desde entonces, la calidad de los datos Dukcapil ha mejorado sustancialmente.

13 Este enfoque comunitario es similar al del Proyecto de Pobreza Urbana y el Programa de Desarrollo de Kecamatan y (más tarde) al Programa Nacional de Empoderamiento Comunitario *(Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat o PNPM)* en 2015. Cuando el PNPM se transformó en el programa Fondo para las Aldeas *(Dana Desa),* la intervención política del organismo ejecutor está reduciendo en gran medida el principio de empoderamiento comunitario que el Gobierno desarrolló con gran esfuerzo y éxito en los tres programas anteriores. Los debates comunitarios y el proceso de toma de decisiones se sustituyeron por las decisiones de los líderes de las aldeas, que deben seguir las órdenes ejecutivas del Ministerio de Aldeas, Desarrollo de Regiones Desfavorecidas y Transmigración.

Bappenas inició el proyecto piloto en 2020 con la participación de los gobiernos locales y los líderes de las aldeas en las primeras 95 aldeas seleccionadas en Aceh, Java Oriental y Java Occidental. En cada proyecto, contrató a trabajadores locales cualificados y con conocimientos informáticos para formarlos como gestores de datos. El trabajo consiste en poner a prueba el registro socioeconómico, la monografía digitalizada de la aldea y el SEPAKAT. Bappenas formó a los gestores de datos en la comprensión de los datos, el proceso de recopilación de datos, la limpieza de datos y el análisis sencillo. El personal de Bappenas, los gestores de datos, el gobierno local y los miembros de la comunidad de la aldea debaten posibles soluciones, y el gobierno local gestiona y ejecuta diversos programas sectoriales y las intervenciones necesarias en cada aldea. Bappenas trabajó directamente y en estrecha colaboración con estos actores sobre cómo utilizar un enfoque integrado para lograr la erradicación de la pobreza extrema en las 95 aldeas.

El proyecto piloto proporciona información muy valiosa en la fase de recopilación de datos, como las discrepancias entre los residentes de las aldeas en la encuesta del registro (socioeconómico) y los datos existentes del registro civil12. La encuesta proporcionó nueva información sobre el riesgo potencial de desastres, la ubicación de las personas con discapacidad, los trabajadores por sectores, la disponibilidad y la calidad de las infraestructuras, el número, el tipo y el tamaño de las entidades empresariales, el patrón de uso del suelo, etc. Los directores locales del proyecto piloto obtuvieron la aceptación y el pleno apoyo de todas las partes interesadas a través de debates con los líderes y miembros de la comunidad.

Bappenas amplió los resultados positivos de los proyectos piloto en las primeras 95 aldeas para abarcar otras 103 aldeas en 2021, mientras que los responsables políticos de Yakarta preparaban normas y reglamentos para replicar los proyectos piloto en todas las aldeas del país.

Estudio de caso de Martoyudan

El registro socioeconómico y la recopilación de datos de la monografía de la aldea se llevaron a cabo en la aldea de Martoyudan, en la regencia de Trenggalek, en la provincia de Java Oriental, en 2020. El gobierno de la aldea dispone de información completa sobre el nombre, la dirección y la situación socioeconómica de cada miembro de la comunidad de la aldea, incluidas las actividades económicas locales. También dispone del nombre, el tipo y el tamaño de todas las entidades empresariales.

Pak Marto vive en Martoyudan con sus seis familiares. Uno de los miembros de la familia recibe una prestación por edad avanzada de 200 000 IDR al mes, pagadera en cuatro plazos anuales. Pak Marto y sus tres hijos trabajan como jornaleros agrícolas con unos ingresos medios mensuales de 400 000 IDR por persona. En 2019, los ingresos medios por persona de su familia eran de 280 000 IDR, mientras que el umbral de pobreza extrema en Trenggalek era de 350 000 IDR por persona al mes. Durante la pandemia, la familia recibió subsidios para alimentos y electricidad.

Pak Marto y sus hijos tienen estudios de secundaria y no tienen ninguna otra cualificación. La aldea de Martoyudan cuenta con una empresa de propiedad municipal (BUMDES) que produce ingredientes para bebidas a base de hierbas. El proyecto piloto recomendó a Sadi, uno de los hijos de Pak Marto, que participara en un programa de formación para elaborar ingredientes para bebidas a base de hierbas, impartido por Agradaya, el comprador. Sadi vende el producto a Agradaya y obtiene unos ingresos adicionales de 1,4 millones de IDR al mes. Después de un año realizando este trabajo adicional, los ingresos personales medios mensuales de la familia de Pak Marto aumentaron hasta los 425 000 IDR. Su familia ya no se encuentra en situación de pobreza extrema.

A finales de 2021, la empresa de la aldea amplió su cooperación comercial con PT Bintang Toedjoe, una gran empresa farmacéutica, además de Agradaya. La empresa también pudo acceder a un capital circulante de 2000 millones de rupias indonesias de i-Grow, una empresa de financiación colectiva. Al mismo tiempo, el gobierno local de Trenggalek estableció un plan para replicar el éxito de la aldea de Martoyudan en el resto de las aldeas de la regencia para el siguiente año fiscal. Cuenta con mucha más información estratégica para priorizar las actividades de desarrollo y aliviar la pobreza

en la región. En caso de que la regencia de Trenggalek necesite apoyo provincial y central, el gobierno local tiene una ventaja mucho mayor, ya que ahora cuenta con información más completa basada en pruebas y análisis exhaustivos.

Conclusión

La protección social de Indonesia se ha desarrollado y cubre a su población desde el nacimiento hasta la vejez. Cuenta con elementos para reducir la carga económica de la vida y promover habilidades productivas, empleos y oportunidades de ingresos. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 demuestra que los programas de protección social pueden servir mejor a la población indonesia si el país dispone de herramientas más fiables para la orientación de los programas y una gestión eficaz y eficiente. Con todas las limitaciones descritas anteriormente, es decir, la falta de precisión de los datos de las listas de beneficiarios de los programas existentes y la débil coordinación entre los organismos ejecutores, Indonesia ha logrado mantener el aumento de la tasa de pobreza lo más bajo posible.

Las políticas sociales y fiscales adecuadas y oportunas del Gobierno han eliminado las predicciones escépticas de las instituciones locales e internacionales de que Indonesia habría tenido una tasa de pobreza mucho más alta en 2020. Además, la reforma de la agenda de protección social de Indonesia implica el compromiso y la contribución de múltiples partes interesadas. El Gobierno no puede trabajar solo.

El proceso de reforma muestra cómo la estrecha colaboración entre los ministerios centrales, los gobiernos locales, los socios internacionales, los reguladores financieros independientes, las entidades empresariales privadas, las organizaciones de la sociedad civil y los miembros de la comunidad en general trabajan juntos y codo con codo. Bappenas también involucró a estudiantes de la Universidad de Indonesia, el Instituto Tecnológico de Bandung y expertos en desarrollo comunitario de Nahdlatul Ulama (la organización de la sociedad civil más grande del mundo) para que aprendieran e intercambiaran teorías y prácticas de desarrollo comunitario en las aldeas piloto.

El caso de Martoyudan muestra cómo se produjo la colaboración público-privada a nivel de aldea. El gobierno local de Trenggalek fue capaz de movilizar recursos de diferentes unidades sectoriales para trabajar conjuntamente. Las unidades implicadas son Cooperativas y Pymes, Empleo y Planificación, Servicio Agrícola, Servicio de Plantaciones, Desarrollo Comunitario de Aldeas y Planificación del Desarrollo de la Regencia de Trenggalek. En otras regencias, las unidades locales de Obras Públicas y Comunicación e Información trabajan codo con codo para apoyar la infraestructura comunitaria y los servicios de Internet necesarios, además de las instituciones financieras locales para proporcionar cualquier servicio que necesiten los aldeanos. En muchos casos, la participación del sector privado es crucial para abrir el mercado a los pobres. La formación de Agradaya en Martoyudan muestra una buena práctica internacional en el ámbito de los productos biofarmacéuticos en la que pueden participar los miembros de la comunidad.

La historia de éxito de la familia Pak Marto se repitió en casi 198 aldeas piloto. Replicar el éxito del proyecto piloto en las 83 596 aldeas restantes no es, sin duda, una tarea fácil. Indonesia aprendió importantes lecciones con los tres programas de empoderamiento comunitario anteriores a 2015. Las operaciones boutique son mucho

más fáciles que las operaciones industriales. Si no se cultiva, supervisa y controla adecuadamente, el proyecto de pobreza extrema cero está condenado al fracaso.